

DESPLAZADOS EN LA FRONTERA COLOMBO-VENEZOLANA

POR OLGA LUCÍA FUENTES

Huyeron de su lugar de origen por causa de la violencia pero su drama se acentúa porque en la retirada debieron llegar a territorio extranjero en donde se les mira como invasores. Acontece con frecuencia en la zona de la frontera colombo - venezolana; decenas de nacionales buscan abrigo en territorio de la vecina república, pero allí, la constante es la desatención y el abandono, pues nadie parece condolerse de su suerte. Al final de cuentas, un gobierno de otro país no debería cargar con habitantes extraños, piensan algunos. Es el doloroso drama de Victor Payares, su familia y amigos que se asientan en San Antonio, Estado Táchira, en Venezuela.

Su caso se conoce porque Víctor, convertido en vocero del grupo, pasa casi cada semana a Cúcuta a solicitar ayuda y en su desesperación no encuentra otro camino que recurrir a las emisoras locales para denunciar lo que viven: el olvido total en una tierra extraña de donde los quieren sacar a como dé lugar.

"Le hemos mandado informes al gobernador -Juan Alcides Santaella, al Alcalde Manuel Guillermo Mora, en fin, a todos los cuerpos y no vemos ninguna clase de solución, ni para nosotros, ni para los niños".

En San Antonio, Víctor vive en un gimnasio. El y sus demás compañeros de infortunio quieren construir sus casas en un terreno que ya vieron y que les pareció el más indicado para iniciar una nueva vida, pero la notificación llegó pronto de las autoridades locales; son áreas de alto riesgo en donde no se puede levantar construcción alguna.

El hacinamiento de meses en el escenario deportivo ya provocó serios problemas de salubridad. Varios adultos y la mayoría de los pequeños se hallan bastante enfermos. La causa principal de las patologías se relaciona con el consumo de agua, que ellos mismos no saben de dónde sale.

Como sus vecinos saben de la procedencia de los desplazados, la constante también son los insultos y los atropellos.

Han intentado pegarnos, casi nos echan del gimnasio y entonces les pedimos el favor a nuestros paisanos que reflexionen para que nos solucionen algo en el menor tiempo posible.

En el gimnasio se encuentran cinco familias colombianas que se mezclan en el mismo lugar con gentes de doble nacionalidad, las cuales se valen de dichas condiciones para imponer su palabra. Entre los nacionales se hallan 25 niños, afectados por un virus que se manifiesta con pequeñas vejigas en el cuerpo. Parias en tierra ajena, no reciben ningún tipo de asistencia social y menos tienen acceso a los servicios de salud.

Como lo anota Jorge Rojas Rodríguez, Presidente de la Consultoría para los Derechos Humanos y el desplazamiento CODHES:

Se mantienen tendencias de migraciones forzadas en las zonas de frontera de carácter temporal que responden a las dinámicas del conflicto armado y que afectan territorios de países vecinos, cuyos gobiernos insisten en medidas restrictivas que agravan la crisis humanitaria .

LA SALUD POR EL SUELO

Pero si los colombianos que se encuentran en San Antonio del Táchira sufren por falta de atención en materia de salud, la situación no es distinta con los que se asientan en lugares de Cúcuta como el Centro de las Migraciones. Un caso ilustra el calvario que padecen en ese sentido; se trata de Javier Pérez, un hombre de 32 años de edad quien debió huir de Ábrego, uno de los 40 municipios de Norte de Santander.

El campesino manifiesta que llegó hace siete meses a la capital del departamento desde Ocaña. En un primer momento fue auxiliado por el Minuto de Dios, pero según su testimonio esta organización cerró sus servicios en materia de salud por que desde Bogotá no giraban los recursos de atención a desplazados.

De acuerdo a lo relatado por don Javier Pérez su situación es calamitosa desde que recibió un disparo de arma de fuego en un combate suscitado en el Alto El Pozo, una vereda de la parte alta de Ábrego.

"El EPL nos amenazó. Nos dijeron que si no salíamos de ahí tendríamos problemas, nos sacaron fue a bala sin explicarnos nada, ni cómo, ni cuando, ni porqué?, sino que absolutamente llegaron y balacearon; y nosotros salimos corriendo...en la carretera siempre me agarraron y no me mataron porque me hice el muerto y salí a perderme. Todo tocó dejarlo abandonado"....

El disparo interesó partes del sistema urinario del desplazado como la vejiga y la uretra. La bala aún se halla incrustada en una de sus nalgas. Los efectos se dejan sentir a cada instante. Don Javier, padece de fiebres y escalofríos.

En el centro de migraciones, la población desplazada, satisface necesidades elementales como el techo y la comida, pero faltan servicios de salud.

"Es un apoyo grandísimo para uno, porque sería peor estar en la calle. A veces, pienso tanto en la vida, que me va a tocar regresar a mi pueblito, caso de la finquita que nosotros la perdimos, estamos amenazados y si entramos, lo hacemos con mucho miedo, porque no se sabe si las personas esas están por ahí".

Antes de adoptar cualquier decisión en torno a lo que será su futuro, Don Javier reconoce que está viviendo de caridad por las calles de Cúcuta. Sobre las actitudes de la gente a la que pide una ayuda relata que algunos lo regañan, otros le dicen que se vaya a trabajar y no faltan quienes advierten que está pidiendo para vicio.

"Estoy enfermo, salgo arrastras. Necesito comprarme algunos antibióticos y no tengo recursos económico, no tengo nada".

En Ábrego trabajaba en su finca, pero ante el cambio de ambiente se declara incapaz de laborar en algo, pues no sabe hacer nada. Enfermo, sin recursos económicos, don Javier Antonio Pérez, ha caído del triste rango de desplazado al lamentable estado de mendigo porque en una ciudad desconocida nadie se ocupa de su caso. Debilitado en su parte física y minado en el aspecto emocional, éste desplazado por la violencia tiene ante sí mas dudas que esperanzas.

EDUCACIÓN, EL ENEMIGO ES EL MIEDO

Cuando la falta de respuestas oficiales no es el inconveniente para lograr que los hijos de los desarraigados vayan a la escuela, aparecen otros motivos que impiden a los menores ir a clases.

La denuncia fue hecha por el Secretario de Educación de la ciudad de Cúcuta, Alvaro Vila Forero, en el marco de un foro convocado por organizaciones no gubernamentales con el ánimo de discutir la problemática que se vive en las concentraciones escolares en donde las aulas se están llenando de niños desplazados por la violencia.

El funcionario relata una historia que comenzó a fines del año 2002, cuando el alcalde de Cúcuta, la capital de Norte de Santander, Manuel Guillermo Mora, obtuvo ayudas del gobierno central para que 400 menores, hijos de desplazados fueran a la escuela. Entonces se abrió la convocatoria y al inicio del año lectivo, esa oportunidad sólo fue aprovechada por 195 familias. Otro 50 por ciento de subsidios se desperdició.

Para el Secretario de Educación, están claras las causas de esa situación: quienes se postulan para acceder a los beneficios deben acreditar su condición de desarraigados, pero en la mayoría de los casos, los afectados no quieren cargar con esa denominación y por tanto prefieren quedar en el anonimato. Así pues, sin el carácter de desarraigados no puede optarse a un cupo escolar de los que concedió el gobierno. El señor Vila Forero, asegura que este año el ejecutivo central volvió a otorgar el mismo número de cupos, pero podría pasar lo mismo, es decir que los beneficiarios no los utilicen.

DE CONVENCION A LA CATEDRAL

El 02 de junio pasado, aparecieron en Cúcuta. Eran 77 familias, unas 300 personas, entre ellas 140 menores de edad, procedentes del municipio de Convención, Norte de Santander, en cuyas áreas rurales se había desatado desde hacía un año una escalada de los grupos de autodefensas, lo cual, provocó un éxodo masivo de campesinos.

José del Carmen Abril, de 33 años, padre de 6 hijos, hacía parte de ese nuevo grupo de desplazados que llegó a Cúcuta por esa fecha y que ante la poca respuesta oficial para brindarles un alojamiento temporal, decidieron concentrarse en la catedral de la ciudad, un

templo ubicado en el mismo parque en donde se localiza la alcaldía y la mayoría de las instituciones oficiales.

La toma del recinto duró pocos días, al cabo de los cuales, parte de los desarraigados se ubicaron en el Centro de Migraciones, una edificación en el Barrio Pescadero de Cúcuta, a cuya cabeza se haya el sacerdote Francisco Bourtignon. Los demás, ocuparon albergues improvisados en barrios aledaños como el Antonia Santos, el Toledo Plata y el Camilo Daza.

La historia de las familias de Convención, es la de desplazados por la violencia que agobiados por las difíciles circunstancias en el entorno urbano, comienzan a considerar la posibilidad de retornar a sus lugares de origen, independientemente de si en esos sitios, el orden público ya permite su regreso.

Carmito, como le dicen cariñosamente a José del Carmen, el líder y vocero de los desplazados que se asientan en el centro de migraciones, refiere que la posibilidad de volver a sus tierras no ha sido posible, porque la burocracia ha trabado ese deseo una y otra vez.

Alude directamente a la poca respuesta de la gobernación de Norte de Santander y de la delegación de la Red de Solidaridad Social. Tenían una fecha para el retorno; el 15 de diciembre, pero nadie quiso apersonarse de la logística y de lo que implica un acompañamiento para hacer el recorrido hasta Convención.

Carmito, enfatiza en que lo más necesario es un apoyo desligado de los escoltas militares o de fórmulas planteadas por el Gobierno, como las de los cascos azules a la colombiana.

"Nosotros exigimos para el acompañamiento, autoridades civiles, defensoría del pueblo, red de solidaridad, procuraduría, derechos humanos, acompañantes, porque para hablar de autoridades como policía y ejército, pues en la zona están sobrando, Convención tiene su batallón, su policía y entonces uno dice lo que necesitamos es gente, porque qué sacamos nosotros con decir que se monten con nosotros militares, pues ahí, se nos complica mucho la situación " ..

En suma, los desplazados que ocupan el centro de migraciones esperan el acompañamiento civil internacional.

Mientras se define esa circunstancia, José del Carmen relata, que los 140 niños perdieron el año lectivo, pues, desde junio no van a la escuela. Alude a que la única ayuda en serio que han recibido de institución alguna durante el semestre, provino de la Consejería en Proyectos; y recuerda que hace un tiempo los visitó un delegado del gobierno noruego, quien estuvo muy pendiente de la posibilidad del retorno.

José del Carmen define en dos palabras su suerte y la de los desplazados que lo acompañan: MANCHA NEGRA.

"Hay gente que cuando sabe que uno es desplazado lo rechaza. Uno no sabe porqué será, si es que el término desplazado es muy criminal o qué contiene esa palabra".

Las angustias de las familias desarraigadas, en el caso de los antiguos ocupantes de la catedral de Cúcuta, crece por la inminencia de la llegada del fin de año, una fecha con la que siempre soñaron, pues, significaban el retorno que ya no se da por estos días. Informan que más que trastornos físicos empiezan a padecer de achaques anímicos, que se acrecientan cuando comparan lo que vivían en el campo y lo que han padecido en la ciudad.

"Uno como campesino en la finca o en la vereda, dice: vamos a hacer una buñuelada, voy hacer pasteles, lo que son hayacas, pues, el campo tiene de todo; voy a coger una gallina, pero acá todo es triste para uno, porque uno no puede exigir, tiene que estar pidiendo permiso, si nos dejan hacer esto, tiene que resignarse a todo; es muy triste, se le cae a uno el rostro, se quebranta uno totalmente de mirar como es todo.

José del Carmen dice que se sienten humillados en extremo y más cuando nadie parece entender su drama, una historia que podría culminar con el retorno a sus tierras, pero que carece del apoyo oficial. Entre tanto, seguirán ocupando el Centro de Migraciones y sectores aledaños, pero siempre soñando con la idea del regreso, así no estén dadas las condiciones para ese proceso, pues, la guerra sigue en los lugares que habitaron hasta el primer semestre del año.

EN QUE CIUDAD VIVEN LOS DESPLAZADOS

Como en Bucaramanga, en la ciudad de Cúcuta, el otro gran centro urbano del nororiente de Colombia, lugar de recepción de personas desplazadas por la violencia, los índices de actos criminales perpetrados contra la vida y la integridad personal son altos, lo cual, ha venido generando una atmósfera de desasosiego generalizado.

El plan de desarrollo municipal de San José de Cúcuta, para los años 2001 y 2003, contiene una visión de ciudad que incluye definiciones como que la capital de Norte de Santander será "el más importante puerto terrestre de Sudamérica, reconocido como centro nodal de servicios y polo de intercambio comercial, turístico e industrial a nivel metropolitano, regional y de la subregión binacional colombo - venezolana de la cuenca del Lago de Maracaibo".

Esa visión es mucho más amplia, pero en los renglones finales habla de lograr las metas a fin de obtener el más alto nivel y calidad de vida dentro de un clima de paz para la inversión nacional y extranjera. Lo expresado en el papel choca con una dura realidad certificada por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses; que en los primeros 11 meses del año, el número de muertes violentas llegó a casi 1.300. El promedio mensual que alcanzaba los 96 hechos de este tipo se disparó hasta 113 en noviembre, una cifra récord, para una ciudad que no tiene más de medio millón de habitantes.

Los registros de Medicina Legal no controvertidos por otras instituciones que en ocasiones buscan disfrazar los altos índices de criminalidad, ya le dieron a Cúcuta la denominación de ciudad más violenta del país, si se tiene en cuenta la proporción entre homicidios y número de habitantes.

¿Qué está pasando? ¿Porqué de 664 homicidios registrados en el 2000, en apenas dos años pasó al doble, sin aún haber terminado el 2002?

Las primeras respuestas se entregan por parte del Comandante de la Policía en Norte de Santander, el Coronel Edgar Orlando Vale Mosquera, quien asegura que la madeja es difícil de desenredar, porque en la mayoría de los casos nadie vio ni oyo nada. Con ello, el oficial pretende significar que hay un bajísimo grado de colaboración de la comunidad para con las autoridades.

El Coronel asegura que los crímenes se perpetran a cualquier hora del día en especial en los barrios de la periferia. Las víctimas son usualmente personas jóvenes y no todas como se quiere hacer parecer tienen antecedentes con la justicia. Un buen número de las personas muertas acababan de arribar a la ciudad desde lugares en donde se presenta una agudización del conflicto armado como por ejemplo el departamento de Arauca y la región del Catatumbo. Los homicidios son cometidos en un 99% con armas de fuego y son usuales los casos en los que mueren dos y tres personas, cuyos cadáveres aparecen en sectores despoblados, muy cerca de sus sitios habituales de residencia.

En Cúcuta, se ensayaron los frentes de seguridad; 1357 grupos de ciudadanos que colaboran con la policía y que dicen estar atentos de lo que pueda ocurrir para dar aviso a las autoridades. Sin embargo, el método no funciona en materia de protección a la vida y el baño de sangre continúa al punto que las autoridades anunciaron a fines de noviembre e inicios de diciembre la conformación de un grupo especializado por hombres del Das, la policía y el ejército, así como técnicos de la fiscalía que se encargarán de investigar los homicidios, llamados en algún sector de la opinión pública como selectivos, como si se quisiera sugerir que se escogen las víctimas porque algo debían.

Para algunos académicos lo que acontece en Cúcuta, es ni más ni menos, que el conflicto armado colombiano prolongado a los centros urbanos. Bandas de milicianos actuando y enfrentando a las autodefensas. Grupos de las extremas que se disputan centímetro a centímetro una ciudad que es paso obligado a la frontera venezolana, y al corazón de un vasto territorio rico en hidrocarburos y cultivos ilícitos como lo es la Gabarra.

La injerencia del narcotráfico en el problema social que vive la capital de Norte de Santander, es alta, a decir de las autoridades. El Catatumbo se convirtió en una extensa zona cultivada con coca, cuyo control se disputan los grupos de extrema derecha con la guerrilla. Es muy común el reclutamiento de personas jóvenes para que laboren como raspachines en esas áreas. Atraídos por el dinero fácil, se van de la casa sin dar aviso y luego se advierte su desaparición.

Pero, no en todos los casos se trata de esa situación. Hay desapariciones forzadas que terminan en muertes, lo cual, incrementa a un número no precisado, el número de

homicidios registrados, según lo señala un investigador de los fenómenos violentos en Cúcuta, el ex diputado Tirso Vélez, que hace parte de la Consejería Ciudadana por la Paz y la Mesa de Trabajo por la Paz.

OFERTA INSTITUCIONAL A DESPLAZADOS EN CÚCUTA

Cuando Tirso Vélez, ex diputado a la Asamblea de Norte de Santander y miembro de organizaciones que trabajan por la paz, lanzó la idea, muchos creyeron que se trataba de un verdadero desatino. Vélez, planteaba la eliminación de la Delegación de la Red de Solidaridad en ciudades como Cúcuta.

El dirigente explica su propuesta. No desconoce en ningún momento el fenómeno y las repercusiones sociales que significa. Calcula que en la capital de Norte de Santander existen unos 30.000 desplazados por la violencia y para dimensionar el asunto sentencia que se trata de una ciudad dentro de otra ciudad. Algunos con exageración argumentan que la cifra de los desarraigados alcanza los 60.000.

Con esos números se justificaría la existencia de la Red, pero su eliminación implicaría que de una vez por todas, otras instituciones oficiales se encarguen de los desplazados y acaben con la indiferencia pues nunca abordan el tema.

El ex diputado aterriza más su argumentación al explicar que como existe la Red de Solidaridad, la Alcaldía y la gobernación para citar solo dos órganos del poder en Cúcuta y el Norte de Santander se despreocupan de la población migrante y no proyectan labores de atención a los afectados.

Lo que advierte el señor Vélez, se confirma por lo menos en el papel si se revisa el plan de desarrollo municipal diseñado por la Alcaldía de Cúcuta, para los próximos años. Es un libro, que se editó bajo la frase "Volvemos a ser ciudad", que es a su vez el eje publicitario e institucional de la administración del burgomaestre Manuel Guillermo Mora.

En el documento de 85 páginas se consigna que "los objetivos, políticas y estrategias definidos en el plan, enmarcan los programas y macroproyectos de los que se desprenderán todas las acciones y proyectos que se han de ejecutar en el período 2001 / 2003. El plan tendrá una inversión calculada de un billón de pesos, recursos que se deberán obtener a través de la capacidad de gestión ante varias fuentes y mecanismos de financiación, así como con recursos propios y transferencias nacionales."

Dentro de los tres objetivos del plan destaca el segundo:

"Generar un clima de paz que garantice el desarrollo individual y colectivo, con igualdad de condiciones y oportunidades sociales, que beneficia especialmente a al población vulnerable".

Para lograrlo se consignaron cinco estrategias, entre las que se advierten "facilitar el acceso a los servicios sociales a la población más pobre y vulnerable, así como priorizar la inversión con criterios de equidad, solidaridad, continuidad y mayor impacto".

Sin embargo, dentro de los siete programas y macroproyectos que se desglosan a lo largo del libro no se contempla uno que incluya a la población desplazada por la violencia.

Del primero al séptimo se habla de generación de riqueza y reducción de los índices de desempleo; de los programas y macroproyectos para garantizar el acceso a los servicios sociales y el fomento de los modos de vida saludables y así hasta la descripción del plan de inversiones sin que se diga nada de los desarraigados.

En suma, en el plan de desarrollo municipal de San José de Cúcuta, no hay un capítulo o siquiera un acápite que se refiera al gran fenómeno del desplazamiento que define a la ciudad como uno de los grandes centros urbanos del país con mayor número de casos de recepción de personas afectadas por el conflicto armado.

El Minuto de Dios actúa como una organización no gubernamental, ONG, contratista de la Red de Solidaridad Social en sus programas de atención humanitaria a la población desplazada que llega a la ciudad de Cúcuta. En el organismo laboran dos trabajadoras sociales y una psicóloga, quienes tienen los elementos de primera mano para saber si el fenómeno ha ido en aumento o descenso en los últimos meses.

Martha Ramírez psicóloga, asegura que lejos de aminorar, la llegada de desarraigados va en aumento. Para constatarlo da cuenta de los cortos que se quedaron dos contratos que se firmaron por valor de más de \$2.000.000.000.00 para la atención a familias afectadas. Los recursos que debían ser invertidos en un plazo de cuatro meses, se gastaron en solo la mitad del tiempo.

La profesional asegura que a fines de noviembre había unas 430 familias en el listado de espera para recibir las ayudas correspondientes que son por lo general marcados, vajillas y un estipendio para el pago de alojamiento.

El Minuto de Dios también hace convenios con el Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, para la entrega de alimentos a los desplazados. Esto permite un poco de más cobertura en la atención a los desplazados, pero la respuesta se queda aún muy corta frente al fenómeno.

En cuatro meses, el Minuto ha atendido a 1128 familias, lo que da un indicador del creciente número de desarraigados que llegan a Cúcuta. En los registros de la Red aparecen núcleos familiares venidos de lugares tan distantes como la Costa Atlántica, el departamento del Cesar, su capital Valledupar, Barrancabermeja, así como desde toda la zona de conflicto de la Gabarra.

Las familias que llegan a la ciudad expresan que Cúcuta es una ciudad atractiva por su condición de frontera, en donde supuestamente hay mayores oportunidades de empleo.

REGISTRO PERIODÍSTICO DEL FENÓMENO DEL DESPLAZAMIENTO

Durante el tercer mes de 2002, el periódico Vanguardia Liberal registró en seis oportunidades el tema de los desplazados por la violencia. Esos artículos se distribuyeron en páginas como Metropolitana, Local, Magdalena medio, Judicial y la separata especial de los domingos, así como la de portada.

En primer término, se hizo referencia el 09 de marzo a un conflicto surgido en el municipio de Girón, entre vendedores de una plaza de mercado y los desarraigados. Los líos surgieron por roces entre las dos partes luego que la Red de Solidaridad ayudara a los desplazados para que se instalaran puestos de ventas en la central minorista. Los ocupantes tradicionales se molestaron y comenzaron los agravios.

Durante el mes también se reseñaron informaciones positivas como por ejemplo el esfuerzo de varias organizaciones no gubernamentales y grupos de desplazados de Barrancabermeja, Santander, que lograron levantar un barrio por el sistema de autoconstrucción.

El 22 de marzo se hizo un reporte estadístico sobre el desplazamiento forzado, sustentado en las cifras que sobre el particular entregaba la Red de Solidaridad Social.

En el Magdalena Medio, también se informó el 24 de marzo del aporte de herramientas a 56 familias que lograron retornar a sus puntos de origen.

Igualmente en ese mismo mes, se dieron nuevos detalles del conflicto armado en Tibú, que es una de las causas principales del desplazamiento en el nororiente del país y una crónica sobre los niños, hijos de desarraigados que se asientan en el sector del 12 de octubre en Girón.